

Provincia, comarca y término municipal	Opción a primas comerciales	Provincia, comarca y término municipal	Opción a primas comerciales	Provincia, comarca y término municipal	Opción a primas comerciales
Alto Turia (C)	4,28	Riberas del Júcar (C)	2,45	<i>Valladolid</i>	
Campos de Liria (C)	1,83	Gandía (C)	1,41	Tierra de Campos (C)	13,08
Requena-Utiel (C)	8,53	Valle de Ayora (C)	4,33	Centro (C)	13,81
Hoya de Buñol (C)	2,18	Enguera y La Canal (C)	2,43	Sur (C)	13,74
Sagunto (C)	1,07	Sa Costera de Játiva (C)	1,88	Sureste (C)	15,36
Huerta de Valencia (C)	1,10	Valles de Albaida (C)	2,01		

4847 *CORRECCION de errores de la Orden de 3 de diciembre de 1985 por la que concede a la Empresa «Sociedad Cooperativa del Campo Unión Cristiana» (expediente V-89/1985) los beneficios fiscales que establece la Ley 152/1963, de 2 de diciembre, sobre industrias de interés preferente.*

Advertido error en el texto remitido para su publicación de la mencionada Orden, inserta en el «Boletín Oficial del Estado» número 27, de fecha 31 de enero de 1986, a continuación se formula la oportuna rectificación:

En la página 4277, segunda columna, B), primera y segunda líneas, donde dice: «Reducción del 95 por 100 de los derechos Arancelarios, Impuesto de Compensación de Gravámenes Interiores e Impuesto», debe decir: «Reducción del 95 por 100 del Impuesto de Compensación de Gravámenes Interiores e Impuestos».

4848 *CORRECCION de erratas de la Orden de 3 de diciembre de 1985 por la que conceden a las Empresas que se citan los beneficios fiscales que establece la Ley 152/1963, de 2 de diciembre, sobre industrias de interés preferente.*

Padecido error en la inserción de la citada Orden, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 27, de fecha 31 de enero de 1986, a continuación se formula la oportuna rectificación:

En la página 4279, primera columna, Cuarto.-, segundo párrafo, segunda línea, donde dice: «300028583, ampliación de una industria de zumos en Beniaján», debe decir: «300028583, ampliación de una industria de obtención de zumos en Beniaján».

4849 *CORRECCION de erratas de la Orden de 5 de diciembre de 1985 por la que se concede a la Empresa «Consulting Agro-Industrial Balear, Sociedad Anónima» (expediente PM-26/1985), los beneficios fiscales que establece la Ley 152/1963, de 2 de diciembre, sobre industrias de interés preferente.*

Padecidos errores en la inserción de la citada Orden, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 27, de fecha 31 de enero de 1986, a continuación se formulan las oportunas rectificaciones:

En la página 4280, segunda columna, A), segunda línea, donde dice: «durante el período de instalación», debe decir: «del Impuesto Industrial durante el período de instalación».

En la página 4281, primera columna, segundo párrafo, segunda línea, donde dice: «se iniciará, cuando precediere, a partir del primer despacho», debe decir: «se iniciará, cuando precediere, a partir del primer despacho».

4850 *RESOLUCION de 13 de febrero de 1986, de la Dirección General de Tributos, relativa al escrito de fecha de 30 de enero de 1986, por el que la Agrupación de Fabricantes de Cemento de España «Oficemen», formula consulta vinculante al amparo de lo dispuesto en el artículo 53 de la Ley 46/1985, de 27 de diciembre, en relación con el Impuesto sobre el Valor Añadido.*

Visto el escrito de fecha 30 de enero de 1986, por el que la Agrupación de Fabricantes de Cemento de España «Oficemen», formula consulta vinculante respecto a la interpretación de normativa reguladora del Impuesto sobre el Valor Añadido.

Resultando que la agrupación es una Entidad legalmente constituida al amparo de la Ley 19/1977, de 1 de abril;

Resultando que las Sociedades integradas en «Oficemen» se encuadran dentro del sector de fabricación de cementos;

Resultando que algunas de dichas Sociedades disponen de un economato donde se venden fundamentalmente productos de primera necesidad, únicamente a trabajadores de tales Sociedades, y al mismo precio en que se adquirieron;

Resultando que solicita se declaren no sujetas al Impuesto sobre el Valor Añadido las operaciones que realizan dichas Sociedades a través de los economatos, por considerarse autoconsumo;

Considerando que de acuerdo con el artículo 4.º, número 1, del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por Real Decreto 2028/1985, de 30 de octubre, están sujetas al mismo:

Primero.-Las entregas de bienes y prestaciones de servicios realizadas por empresarios o profesionales a título oneroso, con carácter habitual u ocasional, en el desarrollo de su actividad empresarial o profesional, incluso si se efectúan en favor de los propios socios asociados, miembros o partícipes de las Entidades que las realicen.

Segundo.-Las entregas de bienes y prestaciones de servicios realizadas sin contraprestación comprendidas en los artículos 10 y 12 del mismo Reglamento.

Considerando que el artículo 10, apartado 2.º, del Reglamento citado establece que se considera autoconsumo de bienes la transmisión del poder de disposición sobre bienes corporales o la cesión de derechos reales de goce o disfrute sobre bienes inmuebles que integran el patrimonio empresarial o profesional del sujeto pasivo efectuada a título gratuito;

Considerando que las entregas de bienes efectuadas por las Sociedades a través de los economatos a que se refiere el escrito de consulta, no se realizan a título lucrativo, sino mediante contraprestación constituida por el precio de coste de adquisición de tales bienes;

Considerando que conforme al citado artículo 4.º, número 3, del Reglamento, la sujeción al Impuesto se produce con independencia de los fines o resultados perseguidos en la actividad empresarial o profesional o en cada operación en particular,

Esta Dirección General considera ajustada a derecho la siguiente contestación a la consulta vinculante formulada por la Agrupación de Fabricantes de Cemento de España «Oficemen»:

Las entregas de bienes realizadas por las Sociedades integradas en dicha Agrupación, a través de sus economatos están sujetas y no exentas al Impuesto sobre el Valor Añadido.

Madrid, 13 de febrero de 1986.-El Director general, Francisco Javier Eiroa Villarnovo.

4851 *RESOLUCION de 13 de febrero de 1986, de la Dirección General de Tributos, relativa a la consulta formulada con fecha 29 de enero de 1986 por la Federación Nacional de Agencias de Transporte de Cargas Completas (ANATRANS-ANAT), al amparo de lo dispuesto en el artículo 53 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 1986*

Visto el escrito de 29 de enero de 1986, por el que la Federación Nacional de Transporte de Cargas Completas formula consulta vinculante al amparo de lo dispuesto en el artículo 53 de la Ley 46/1985, de 27 de diciembre;

Resultando que la Federación Nacional de Agencias de Transporte y Cargas Completas (ANATRANS-ANAT) es una organización patronal;

Resultando que las agencias de transporte reciben servicios de diversos transportistas;

Resultando que el conductor de los vehículos en los cuales se realiza el transporte no es, en la mayoría de los casos, titular de la Empresa transportista sino un simple mandatario verbal de dicho titular, que compromete el transporte y cobra su importe;

Resultando que ordinariamente los conductores de los vehículos de transporte no están autorizados por sus respectivas Empresas para emitir facturas;

Resultando que los usos del transporte han originado la denominada carta del porte en la que se sustancian los términos del contrato. Dicha carta de porte se emite por la agencia de transporte, quien facilita copia al transportista;

Considerando que el Real Decreto 2402/1985, de 18 de diciembre, por el que se regula el deber de expedir y entregar factura que incumbe a los empresarios o profesionales establece en su artículo 2.º 1, que los empresarios y profesionales están obligados a emitir y entregar factura por cada una de las operaciones que realicen y a conservar copia o matriz de la misma, incluso en los casos calificados como autoconsumo en el Impuesto sobre el Valor Añadido;

Considerando que el citado precepto establece que el deber de emitir y entregar facturas incumbe incluso a los empresarios o profesionales acogidos al régimen simplificado del Impuesto citado;

Considerando que, de acuerdo con lo establecido en el mencionado Real Decreto, la obligación de expedir y entregar factura completa, ajustada a lo dispuesto en el artículo 3.º de la citada disposición, se exige con carácter general y sin excepción alguna en los casos en que los destinatarios de la operación sean empresarios o profesionales que actúen en el ejercicio de su actividad empresarial o profesional y deban disponer de dichas facturas para poder practicar las correspondientes minoraciones o deducciones en la base o en la cuota de aquellos tributos de los que sean sujetos pasivos;

Considerando que ni el Real Decreto 2402/1985, de 18 de diciembre, ni el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por Real Decreto 2028/1985, de 30 de octubre, autorizan a sustituir la factura que preceptivamente debe ser emitida por el sujeto pasivo que realice las entregas de bienes o prestación de los servicios, por un documento contractual emitido por el destinatario de dichas operaciones y suscrito por ambas partes como prueba de pago del precio, fuera de los supuestos excepcionales autorizados por las referidas disposiciones;

Esta Dirección General considera ajustada a derecho la siguiente contestación a la consulta formulada por la Federación Nacional de Agencias de Transporte de Cargas Completas (ANATRANS-ANAT):

Primero.-En aplicación de lo establecido en el Real Decreto 2402/1985, de 18 de diciembre, las Empresas que presten servicios de transporte a las agencias están obligadas a emitir y entregar a los destinatarios de dichos servicios facturas en las que deberán consignar los datos y ajustarse a los requisitos previstos en el artículo 3.º de dicho Real Decreto.

Segundo.-El deber de emitir y entregar facturas establecido en las disposiciones vigentes que incumbe a los transportistas no puede entenderse cumplido mediante la emisión de una carta de porte efectuada por las agencias de transporte destinatarias de dichos servicios, ni siquiera en los casos en que la misma se firme por el conductor del vehículo en el que se realice el transporte.

Madrid, 13 de febrero de 1986.-El Director general, Francisco Javier Eiroa Villarnovo.

4852 *RESOLUCION de 13 de febrero de 1986, de la Dirección General de Tributos, relativa a la consulta vinculante formulada con fecha 3 de enero de 1986 por la Asociación Catalana de Podólogos, al amparo de lo dispuesto en el artículo 53 de la Ley 46/1985, de 27 de diciembre.*

Visto el escrito de fecha 3 de enero de 1986, por el que la Asociación Catalana de Podólogos formula consulta en relación al Impuesto sobre el Valor Añadido, al amparo de lo dispuesto en la Ley 46/1985, de 27 de diciembre;

Resultando que la Asociación Catalana de Podólogos es una Asociación Profesional;

Resultando que el Podólogo es una profesión sanitaria que tiene por función el tratamiento de las afecciones y deformidades de los pies;

Resultando que entre las competencias atribuidas a los Podólogos por la legislación vigente se incluyen las de exploración del pie, quiropodia, cirugía de la uña y de la verruga, aplicación y confección de soportes o plantillas hechas a medida y, según moldes realizados en función de la malformación del pie de cada paciente, la órtesis y prótesis de dedos del pie y la confección de férulas para la extremidad inferior;

Considerando que en virtud de lo dispuesto en el artículo 4.º del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por Real Decreto 2028/1985, de 30 de octubre, están sujetas al citado Impuesto las entregas de bienes y prestaciones de servicios realizadas a título oneroso, con carácter habitual u ocasional en el desarrollo de su actividad empresarial o profesional;

Considerando que el artículo 13, número 1, apartado tercero, del citado Reglamento declara exenta del Impuesto la asistencia a

personas físicas en el ejercicio de profesiones médicas y sanitarias definidas como tales por el ordenamiento jurídico;

Considerando que, según lo dispuesto en el mencionado precepto, la exención incluye los servicios de asistencia médica, quirúrgica y sanitaria relativas al diagnóstico, prevención y tratamiento de las enfermedades, incluidas las de exploración del pie, quiropodia y cirugía de la uña y de la verruga;

Considerando que la referida exención no puede extenderse a la confección de soportes, plantillas, órtesis y prótesis de dedos y pie, ni de férulas para las extremidades inferiores;

Considerando que no resulta admisible la analogía para extender más allá de sus términos estrictos el ámbito de las exenciones tributarias, por prohibirlo el artículo 24 de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria;

Considerando que, según lo dispuesto en el artículo 94 del Reglamento del Impuesto, el régimen simplificado sólo será de aplicación respecto de los sectores de actividad mencionados en dicho precepto, entre los cuales no se incluyen los correspondientes a las actividades ordinariamente realizadas por los Podólogos;

Esta Dirección General considera ajustada a derecho la siguiente contestación a la consulta formulada por la Asociación Catalana de Podólogos:

Primero.-Están exentos del Impuesto sobre el Valor Añadido los servicios de asistencia sanitaria prestados por podólogos, relativos a la exploración del pie, quiropodia y cirugía de la uña y verruga.

La exención no se extiende a la confección y aplicación de prótesis y órtesis del pie, ni a las de confección de férulas para las extremidades inferiores del ser humano.

Segundo.-No podrán optar por el régimen simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido los sujetos pasivos que realicen las actividades de confección y aplicación de prótesis del pie.

Madrid, 13 de febrero de 1986.-El Director general, Francisco Javier Eiroa Villarnovo.

4853 *RESOLUCION de 13 de febrero de 1986, de la Dirección General de Tributos, relativa al escrito de fecha 17 de enero de 1986, por el que el Colegio Oficial de Farmacéuticos de la provincia de Badajoz formula consulta vinculante, al amparo de lo dispuesto en el artículo 53 de la Ley 46/1985, de 27 de diciembre, en relación con el Impuesto sobre el Valor Añadido.*

Visto el escrito de fecha 17 de enero de 1986, por el que el Colegio Oficial de Farmacéuticos de la provincia de Badajoz formula consulta vinculante respecto al tipo impositivo aplicable a las entregas de alcohol con fines sanitarios efectuadas por alcoholeras o intermediarios a los farmacéuticos con Oficina de Farmacia abierta al público;

Resultando que la entidad consultante es un Colegio profesional;

Resultando que los farmacéuticos con Oficina de Farmacia abierta al público efectúan compras de alcohol a las alcoholeras o a través de intermediarios, para su venta con fines sanitarios;

Considerando que el artículo 57, número 1, apartado 5.º del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por Real Decreto 2028/1985, de 30 de octubre, establece la aplicación del tipo impositivo del 6 por 100 a las entregas o importaciones de medicamentos y material sanitario;

Considerando que en el mismo precepto se definen los medicamentos como las sustancias simples o compuestas preparadas y dispuestas para su uso medicinal inmediato, y el material sanitario como los artículos, aparatos e instrumentos que por su naturaleza y función se destinen a usos medicinales, es decir, que tengan por objeto prevenir, diagnosticar, tratar, curar o aliviar las enfermedades del hombre y de los animales;

Considerando que, por consiguiente, será de aplicación el tipo impositivo del 6 por 100 a las entregas e importaciones de los siguientes artículos o productos:

Primero.-Los que exclusivamente puedan ser utilizados como medicamentos o material sanitario.

Segundo.-Los que ordinariamente se utilicen como medicamentos o material sanitario, aunque sean susceptibles de destinarse a otros usos, siempre que se adquieran por Oficinas de Farmacia, establecimientos de hospitalización o asistencia sanitaria u otras Entidades que lleven a cabo actividades sanitarias cuya realización requiera la utilización de los citados artículos o productos;

Considerando que los farmacéuticos con Oficina de Farmacia abierta al público están sometidos al régimen especial del recargo de equivalencia, siempre que se cumplan todos los requisitos exigidos en el capítulo VII del título V del citado Reglamento;